

CRONICA

Cambios constitucionales, encenderían alertas sobre calificación soberana

Claudia Villegas Cárdenas

Hace apenas unos días, la agencia S&P Global reafirmó en “BBB” la calificación soberana para la deuda del gobierno mexicano. Para la moneda local, la calificación fue de BBB+

Muchos festejamos porque representa que, para la influyente agencia calificadora de riesgo en inversiones, México – por ahora – no enfrenta mayores problemas para cubrir sus compromisos. Festejamos sin saber que nuestro grado de inversión se ubica apenas un escalón antes de la calificación BBB – y a dos peldaños de ser una inversión especulativa. Tampoco sabíamos que para festejar tendríamos que estar en A, AA y AAA. Pero, claro, también sabemos que bajo las actuales condiciones de endeudamiento que rigen en el mundo, es prácticamente imposible contar un AAA.

La reflexión viene al caso porque una de las notas que vale la pena destacar del reporte de S&P que sustenta la ratificación del grado de inversión en “BBB” para la economía mexicana es, precisamente, la que señala que si la economía mexicana estuviera sujeta a cambios de gran calado podría presentarse una revisión.

S&P aclaró, sin embargo, que independientemente del resultado del 2 de junio, el próximo gobierno mantendrá una ejecución cautelosa de la política macroeconómica, lo que implica una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales bajos. Para S&P el próximo gobierno presentará un presupuesto para 2025 que reduzca el déficit público de 5% de este año.

Sin embargo, también reconoce que la reafirmación de la calificación de “BBB” implica que no habrá cambios en iniciativas políticas de gran calado “que mejoren o perjudiquen el entorno de negocios de México”, o que afecten la tendencia del crecimiento económico en un año electoral también para Estados Unidos, el principal socio comercial del país.

Para otros analistas, los riesgos siguen en el terreno de la baja inversión en infraestructura que no supera los 797,000 millones de pesos; el peso de la red social – las transferencias para grupos vulnerables – que están consumiendo el presupuesto; el alto costo del servicio de la deuda; el peso de las pensiones ahora que se confirmó la creación de un fondo por 64,000 millones de pesos para las pensiones del IMSS y del ISSSTE.

También mencionan – ahora que Estados Unidos no cayó en recesión – la posibilidad de un choque externo, proveniente de alguna otra región. Los expertos con una visión más negativa se preguntan cómo será el plan de ajustes para el presupuesto en 2023 y cuál será el impacto en el modelo económico que se ha impulsado. ¿Será sostenible la dinámica del gasto? Esa es otra de las inquietudes que, junto con la situación de Pemex, preocupan a los observadores del buen desempeño que – hasta ahora – muestra la economía.